

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital 10
Un semestre id. id. 6
Un trimestre id. id. 4
Números sueltos 0'25
Se publica todos los días excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veinte días de su promulgacion, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgacion el dia en que termine la insercion de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (q. D. g.), y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Orense y el Juez de instruccion de Carballino, de los cuales resulta:

Que en el referido Juzgado se presentó por D. Manuel Rodriguez y Don José Barro Fernandez una denuncia contra el Ayuntamiento y Junta repartidora del impuesto de Consumos del pueblo de Pungin, por fraude y exaccion ilegal en la distribucion y recaudacion de dicho impuesto, é instruido el correspondiente sumario, acordó el Juzgado que se oficiara al Alcalde del expresado pueblo, á fin de que compareciera ante el Juzgado el Secretario del Ayuntamiento con los repartimientos de consumos correspondientes á 1890 91 y 1891 92, las bases que se hubieran tenido en cuenta para formarlos, el expediente donde constara el nombramiento de la Junta repartidora que habia confeccionado el repartimiento del año de que se trataba, los padrones de vecinos en los años 90 y 91 y los libros de actas donde constara el nombramiento de los individuos que compusieran el Ayuntamiento, con objeto de compulsar lo necesario para demostrar el hecho denunciado:

Que el Alcalde de Pungin manifestó al Juzgado que los padrones se forman de cinco en cinco años, y no siendo los de 1890 y 91 comprendidos dentro del quinquenio, no podian existir en el Archivo; que en 1890 y 91 no hubo repartimiento de consumos, puesto que, para hacer efectivo el cupo, se acordó el encabezamiento gremial; que en 1891 92, si se habia hecho el reparti-

miento, habia sido solo por el grupo que prescribe la segunda parte del artículo 4.º del reglamento, y debia obrar en la Administracion de la provincia; que en la misma debia estar el otro expediente á que se referia el Juzgado, y, por último, que los libros de actas existian en poder del Secretario del Ayuntamiento; pero que el Alcalde no podia obligar á éste á que llevara al Juzgado ningun documento que esté bajo su custodia, por las responsabilidades que pudieran originársele con tal motivo:

Que el Juzgado dictó otra providencia acordando que se manifestara al Alcalde que, con arreglo á la ley Municipal, el padron debe ser rectificado todos los años por lo cual debian existir en Secretaría las rectificaciones de 1890 y 91; que tambien debian obrar en la Secretaria los repartimientos del impuesto de consumos, aprobados, uno por la Administracion de Contribuciones de la provincia, y otro por la de Consumos; que del libro de actas solo se necesitaba certificacion de los individuos que formaban el Ayuntamiento que habia á la sazón en Pungin, y, por último, que si no ordenaba el Alcalde lo conveniente para que los documentos reclamados fueran presentados en el Juzgado á la brevedad posible, á fin de examinar ciertos particulares, se procedería á lo que hubiere lugar, por denegacion de auxilio, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento del Gobernador de la provincia:

Que el Alcalde contestó remitiendo al Juzgado la certificacion que le reclamaba, añadiendo que, en cuanto á la presentacion de los demás documentos daba traslado al Gobernador de la provincia, con objeto de que dispusiera lo que procediese sobre el particular, toda vez que el Secretario, sin que previamente se le dieran las convenientes seguridades, se oponia á sacar del Archivo documentos cuya custodia le pertenecia, y que tan pronto como recibiera la orden superior lo pondría en conocimiento del Juzgado, debiendo significarle que el reparto original del impuesto de consumos estaba en la Administracion de Contribuciones y Rentas de la provincia:

Que el Juzgado, vista la negativa del Alcalde de Pungin á que fuera presentada la mayoría de los documentos reclamados, acordó deducir el

tanto de culpa para proceder á lo que hubiera lugar, poniendo el hecho en conocimiento del Gobernador de la provincia, á fin de que ordenara al Alcalde de Pungin presentara los documentos, excepcion hecha del reparto de consumos, que obraba en poder de la Administracion, y de la certificacion que el Alcalde habia y remitido:

Que teniéndose por incoado el sumario en averiguacion del hecho que se ha indicado, fué declarado procesado el Alcalde, decretándose la suspension en dicho cargo y en el de Concej al del Ayuntamiento de Pungin, poniéndolo en conocimiento del Gobernador, á los efectos de la ley Municipal, y acordándose la práctica de otras diligencias:

Que el Gobernador de Orense, de acuerdo con la Comision provincial, y en vista de la comunicacion que le habian dirigido el Alcalde y el Juez, requirió de inhibicion á éste, fundándose en que si fuese delito el hecho de que se trata, y claro el derecho de los Tribunales para extraer de los archivos todo lo que considerasen necesario, se daría el espectáculo de que por denuncias mas ó menos fundadas podria trasladarse al Juzgado la totalidad ó partes esenciales de los archivos de todas clases, situados en cada partido judicial, dando lugar á trastornos ó extravíos y á entorpecimientos en el despacho ordinario de las dependencias á que el archivo perteneciese; en que las leyes 15, tit. 10 libro 11 y 20, tit. 4.º libro 3.º de la Novísima Recopilacion, prohibieron que se sacase de los archivos ninguna clase de documentos para las pruebas judiciales; en que si bien la Real orden de 16 de Julio de 1849 autoriza la extraccion de ellos por los Tribunales, lo hace, no solo exigiendo que queden en su lugar copias literales, hasta que los documentos sean devueltos, sino con limitacion de que cuando el Jefe de la dependencia crea perjudicial ó inconveniente la entrega á los Tribunales, debe consultar al Gobierno; en que los Tribunales deben ordenar la extraccion de expedientes y papeles del archivo, solo cuando constituyan cuerpo de delito, dejando copia literal de ellos, y limitarse en los demás casos á hacer los cotejos y compulsas, trasladándose para ello á los locales del archivo, comisionándose á los Jueces

municipales; en que el Alcalde de Pungin habia cumplido con su deber al hacer al Gobernador la consulta de si debía ó no ordenar al Secretario la conduccion del expediente y papeles al Juzgado de Carballino, y que mientras estuviera pendiente ese trámite, no parece correcto que el Juez hubiese procesado al Alcalde; en que existe en este asunto la cuestion previa á que se refiere el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, y si el Alcalde hubiese cometido alguna falta, su castigo corresponderia al Gobernador según lo dispuesto en el art. 182 de la ley Municipal, pareciendo que la omision del Alcalde no puede constituir delito, porque si se le hubiera ordenado la remision de los documentos, el Gobernador seria el obligado á hacer cumplir su mandato, y se hubiese evacuado dicha consulta en sentido negativo, ninguna responsabilidad podria recaer sobre el Alcalde:

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdiccion, alegando: que la negativa del Alcalde de Pungin no envuelve una falta administrativa, sino que reviste los caracteres de un delito comprendido en el Código penal, correspondiendo su conocimiento á la jurisdiccion ordinaria; que si la Autoridad administrativa tuviera atribuciones para calificar previamente el acto justicial de sus subordinados vendria la Administracion á resolver sobre el fondo del asunto, apropiándose facultades que solo corresponde á los Tribunales ordinarios, que son los que deben depurar la culpabilidad ó inculpabilidad de los procesados; que denunciando un delito de falsedad y otros conexos en el repartimiento de consumos, el Juzgado tiene derecho para reclamarlo, así como todos los demás documentos que constituyan prueba de la existencia del delito denunciado, por lo cual no puede existir cuestion previa que deba ser resuelta por la Administracion, por no ser la materia de indole administrativa; y por último, que aun en el caso de hallarse vigente la Real orden de 16 de Julio de 1849, podria servir en su dia de exculpacion al Alcalde si es que su conducta se ha atemperado á ella, lo cual corresponde apreciar á los Tribunales de justicia, pero no á la Administracion; el Juzgado citaba el art. 182 de la ley Muni-

cial, el cap. 5.º, tit. 7.º, libro 2.º del Código penal y el art. 335 de la ley de Enjuiciamiento criminal:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 335 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según el cual, si por tratarse de delitos de falsificación cometida en documentos ó efectos existentes en dependencias del Estado hubiere imprescindible necesidad de tenerlos á la vista para el reconocimiento pericial y examen por parte del Juez ó Tribunal, se reclamarán de la correspondiente Autoridad, sin perjuicio de devolverlos á los respectivos Centros oficiales después de terminada la causa:

Visto el cap. 5.º, tit. 7.º, libro 2.º del Código, que define y castiga los delitos de desobediencia y denegación de auxilio:

Considerando:

1.º Que el hecho que ha dado lugar á la formación de la causa, consiste en no haber cumplido el Alcalde de Pungin la orden del Juzgado, relativa á la presentación de ciertos documentos que se estiman por la Autoridad judicial como necesarios para la recta administración de justicia.

2.º Que, con arreglo á las disposiciones del Código penal, puede el referido hecho constituir un delito cuya averiguación y castigo corresponde á la jurisdicción ordinaria.

3.º Que no existe cuestión alguna previa que deba resolverse por la Administración, porque el apreciar si el Alcalde obró ó no en el ejercicio de su derecho es lo que constituye el objeto de la causa y lo que ha de servir de base á la calificación del delito y á la responsabilidad del que resulte autor del mismo.

4.º Que no se está, por tanto, en ninguno de los dos casos, en que, por excepción, pueden suscitarse competencias por la Administración en los juicios criminales.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á once de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—
Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 23)

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de la provincia de Leon y la Audiencia de lo criminal de dicha capital, de los cuales resulta:

Que la Guardia civil del puesto de Lillo denunció en 7 de Octubre de 1891 ante el Alcalde de dicho pueblo el hecho de que Eleuterio Bercianos, vecino de Cofñal, había sido sorprendido el referido día, conduciendo en un carro 10 rachones de madera de haya, procedentes del monte del expresado Cofñal, titulado Val de Tronisco.

Que puesto el hecho por el Alcalde de Lillo en conocimiento del Ingeniero Jefe de la provincia, éste transcribió la

comunicación del Alcalde al Juzgado de Instrucción de Rianjo para que procediera á perseguir y castigar el delito denunciado, consistente en haber extraído productos de un monte público:

Que instruida la correspondiente causa, en la que fué tasada la madera ocupada á Bercianos en una peseta 50 céntimos, según declaración del capataz de cultivos, y una vez terminado el sumario, fué éste remitido á la Audiencia de Leon, siendo calificado por el Ministerio fiscal el hecho de autos de un delito de hurto, de que era autor Eleuterio Bercianos, habiéndose hecho constar en la causa por medio de una certificación del Jefe del distrito forestal de Leon, que en 16 de Octubre de 1891 se había concedido al pueblo de Cofñal una licencia de leñas y pastos consistente en 200 esteros de ramaje, 160 de ramón, 150 de brozas, 200 ovejas, 40 cabras, 140 vacas y siete caballerías, habiéndose señalado el aprovechamiento del ramaje y de las brozas en el monte titulado Val de Tronisco y sitios que expresaba la certificación:

Que señalado día para el acto del juicio, el Gobernador, á instancias de Eleuterio Bercianos, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición á la Audiencia, fundándose en que habiendo manifestado el Alcalde de Cofñal que á este pueblo correspondía el uso gratuito de los productos del monte, la extracción de esos productos, sin la oportuna autorización del Jefe del distrito forestal, constituye un hecho castigado con una multa que debe ser impuesta por la Administración, y en que en el caso de que hubiera habido exceso en el aprovechamiento, tanto por la corta ó beneficio de la misma cuanto por el modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones, sería la Administración la llamada á conocer del hecho denunciado, correspondiendo asimismo á la autoridad administrativa resolver la cuestión previa, por lo mismo que es la facultada para autorizar el aprovechamiento, y en que este es uno de los casos en que pueden promoverse competencias en los juicios criminales. El Gobernador citaba los artículos 32 y 40 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884 y los artículos 2.º y 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente, la Audiencia sostuvo su jurisdicción, alegando que el hecho perseguido en la causa, que consiste en haberse apropiado el procesado maderas del monte común de Cofñal, constituye un delito de hurto, sin que obste á esta calificación la circunstancia de ser el reo vecino de dicho pueblo, y tener éste el uso gratuito de los productos del monte, puesto que el día 7 de Octubre de 1891, fecha en que el delito se perpetró, no tenían los vecinos de Cofñal licencia del Ingeniero Jefe de montes para tal aprovechamiento, sin que baste suponer que el procesado por entonces había satisfecho las cuotas que le correspondían á fin de obtener tal licencia; y que á los Tribunales corresponde el conocimiento del hecho denunciado. El Tribunal citaba los artículos 4.º y 40 (caso 4.º) del Real decreto de 8 de Mayo de 1884.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Admi-

nistración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa, de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 32 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, según el cual, los pueblos á quienes corresponde el uso gratuito de los productos de los montes no procederán á ejecutarlo sin la autorización del Jefe del distrito, el cual la concederá cuando se le presente la carta de pago del 10 por 100 del importe de lo que haya de aprovecharse, según dispone el art. 6.º de la ley de 11 de Julio de 1877, y con las excepciones que en el mismo artículo se preceptúan. Los que contravinieren esta disposición, abonarán como multa el valor de los productos aprovechados:

Visto el art. 40 del referido Real decreto, que dice lo siguiente: son Autoridades competentes para conocer de las denuncias, imposición y exacción de las multas y demás responsabilidades prescritas en los artículos anteriores, los Gobernadores civiles de las provincias y los Alcaldes, con sujeción á las reglas siguientes:

1.ª Las multas y demás responsabilidades relativas á la roturación, corta, venta ó beneficios de aprovechamientos forestales sin la autorización competente, al modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones y á las infracciones que se cometan de las reglas establecidas para la celebración de las subastas, serán impuestas por los Gobernadores.

2.ª Las multas y responsabilidades pecuniarias de las demás clases de infracciones, serán impuestas por los Alcaldes cuando su importe no exceda del límite para que les faculte la ley Municipal. Las que excedan de dicho límite deberán ser impuestas por los Gobernadores.

3.ª De los daños causados en los montes públicos cuyo importe exceda de 2 500 pesetas, conocerán los Tribunales de justicia, con arreglo á las prescripciones del Código.

4.ª Cuando la infracción de un precepto de las leyes y disposiciones vigentes que tenga penalidad señalada haya sido medio de perpetrar un delito definido en el Código penal, se reservará su castigo á los Tribunales.

Considerando:

1.º Que el hecho de que se trata consiste en haber extraído del monte de Cofñal unos rachones de haya, tasados en una peseta 50 céntimos, Eleuterio Bercianos, vecino del pueblo, correspondiendo á éste, según manifiesta el Alcalde, el uso gratuito del monte en el cual se ha verificado la extracción.

2.º Que con arreglo á las disposiciones que quedan copiadas, el hecho ejecutado por Eleuterio Bercianos podrá ser objeto de una multa cuya imposición corresponde á las Autoridades gubernativas, ya por tratarse de un daño que no llega á la cantidad necesaria para que del mismo conozcan los Tribunales, ya por poder constituir una infracción respecto al modo ó tiempo de verificar el aprovechamiento.

3.º Que se está, por tanto, en un caso de aquellos en que, por excepción, pueden promoverse contiendas de competencia en los juicios criminales.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á once de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—
Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. (G. núm. 21)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL ORDEN

Ilmo. Sr: Visto el expediente instruido á instancia de D. José Utrilla y Utrilla, Registrador de la propiedad de Estrada, sobre declaración de méritos de este funcionario por los trabajos de reorganización de la oficina de su cargo:

Resultando que, previa autorización del Presidente de la Audiencia, procedió este interesado á rectificar la numeración equivocada de las fincas, no solo en los libros del Registro, sino también en los índices, invirtiendo un mes en este trabajo con personal extraordinario: encuadernó de nuevo 22 libros, sustituyó los cartones en otros 24, hizo que fuera nuevamente encuadernado en pasta doble, por exigirlo así su volumen, el primer tomo de cada uno de los tres Ayuntamientos de que se compone el distrito, y todos, excepto cuatro, fueron retocados, poniéndoles punta de pergamino, guarda, y telas nuevas, habiendo dispuesto para la mejor conservación de los legajos que se guardarán bajo uniformes carpetas rotuladas, de que carecían anteriormente, y habiendo sustituido los índices existentes al poseionarse del Registro, compuestos de 215 legajos, por 10 tomos esmeradamente encuadernados, previa una minuciosa rectificación de los asientos, siendo completamente nuevos los de personas por no ser utilizables los antiguos á causa de las inexactitudes que contenían:

Resultando que girada la visita extraordinaria á dicho Registro, con sujeción á la instrucción de 16 de Julio de 1875, aparece llevada la oficina con arreglo á la ley Hipotecaria y su reglamento, y solo en un caso se observó que no aparecía cumplido el artículo 10 del Real decreto de 14 de Noviembre de 1885:

Resultando que el Juez delegado y el Presidente de la Audiencia han informado que los trabajos realizados por D. José Utrilla son de mérito extraordinario, dignos de pronta recompensa, revelando claramente, no solo el estricto cumplimiento de los deberes de su cargo, sino un gran celo y entusiasmo por el servicio, debiendo cuando menos, servirle de mérito en su carrera, á los efectos del núm. 2.º del art. 5.º del Real decreto de 17 de Noviembre de 1890:

Resultando que el correspondiente Negociado de esa Dirección general también informa en sentido favorable, y visto el citado Real decreto de 17 de Noviembre de 1890 y la Real orden de 22 de Marzo de 1892:

Considerando que son tres los trabajos extraordinarios llevados á efecto por D. José Utrilla en el Registro de la Propiedad de Estrada, á saber: rectificación de la numeración de fincas, encuadernación y reencuadernación de libros de la antigua Contaduría, y del moderno Registro y arreglo de legajos y rectificación y formación de índices:

Considerando que no son estos trabajos de aquellos á que todo Registrador está obligado en cumplimiento de las disposiciones á que están sujetos en el desempeño de su cargo, y que con ellos ha prestado D. José Utrilla un extraordinario servicio de evidente utilidad para los interesados en la propiedad inmueble del partido de Estrada y para el público en general.

Considerando que este interesado lleva el Registro con sujeción á lo dispuesto en la ley Hipotecaria y reglamento dictado para su ejecución, sin que la circunstancia de hallarse incumplimentado en un caso el art. 10 del Real decreto de 14 de Noviembre de 1885, por ser excepcional, impide formar aquel juicio;

S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey

D. Alfonso XIII (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, ha tenido á bien declarar que D. José Utrilla y Utrilla se ha distinguido en el desempeño de su cargo como Registrador de la Propiedad de Estrada, prestando un servicio especial y extraordinario, y que en consecuencia se le estime comprendido en la circunstancia 2.ª del art. 5.º del Real decreto de 17 de Noviembre de 1890 á los efectos del mismo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1893.—Montero Ríos. Sr. Director general de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: La intensidad con que la filoxera invade las mejores zonas vitícolas de la Península, exige la aplicación enérgica é inmediata de las disposiciones dictadas en el Real decreto de 30 de Julio del año último. La base de todas ellas consiste en la creación de estaciones de Ampelografía americana, con objeto de sustituir las vides que sucumben á la enfermedad y prevenir con nuevas plantaciones el desarrollo del contagio. Los viticultores cuyos viñedos han sufrido el primer ataque encontrarán así á su alcance el medio de luchar con la plaga, y aquellos á quienes la experiencia avise el peligro, podrán de antemano precaverse y cooperar á la defensa del país, amenazando seriamente en uno de sus elementos más importantes de riqueza.

Pero si la creación de estos Centros es indispensable, su sostenimiento sería imposible si las provincias y Municipios no contribuyesen con los medios establecidos por la ley para la creación de las estaciones centrales y de los campos de experimentación. A este fin se han destinado las cantidades recaudadas en la forma que previene el art. 12 de la ley de Defensa contra la filoxera; pero no habiéndose reunido, aun cantidades suficientes para el objeto, no puede este Ministerio desarrollar sus medios de acción en la medida necesaria y habrá de limitarse á los recursos ya obtenidos, esperando que las medidas con las cuales va á llevar á la práctica las disposiciones de la ley servirán para excitar el celo de las provincias y de los Municipios.

Entre tanto, es deber de este Departamento allegar todos los medios á su disposición y reunir el personal necesario, con el menor gasto posible y con todas aquellas economías compatibles con la eficacia del servicio, á cuyo efecto se organizarán por el momento tres centros de acción en las regiones de Cataluña, Andalucía y del Noroeste, donde son mayores los estragos causados por la filoxera. Los procedimientos adoptados y que se contienen en las adjuntas disposiciones, demostrarán cual es el sistema que el Gobierno se propone seguir para realizar estos fines.

Y en vista de las anteriores consideraciones, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:

1.º Se establecen en España tres estaciones de Ampelografía americana para las regiones de Cataluña, Andalucía y Noroeste, que se instalarán en Barcelona, Zamora y Granada.

2.º Las estaciones á que se refiere la disposición anterior se organizarán y regirán con arreglo á lo que dispone el Real decreto de 30 de Julio último en su título 6.º y siguientes.

3.º Las Diputaciones provinciales ó los Ayuntamientos de las capitales, ciudades ó villas donde hayan de ins-

talarse las estaciones, facilitarán los locales para los laboratorios químicos y micrográfico, así como el campo experimental que para cada una se necesite.

Para la de Cataluña se utilizarán desde luego todo los elementos de que dispone la Granja experimental de Barcelona.

4.º El servicio de cada una de las estaciones se hará por los Ingenieros agrónomos de las respectivas localidades auxiliados por los Peritos agrícolas, Ayudantes y Capataces de las mismas.

5.º Los gastos que origine la instalación y sostenimiento de estos Centros, se satisfarán con cargo al fondo creado por el art. 12 de la ley de Defensa contra la filoxera de 18 de Junio de 1885, á cuyo fin se situarán en el Banco de España todas las cantidades que por dicho concepto se recauden en cada una de las sucursales de las provincias.

6.º Se invitará á las Diputaciones y Ayuntamientos de Zamora y Granada para que en el plazo de diez días pongan á disposición de este Ministerio locales suficientes para la instalación de los laboratorios y el terreno necesario para campos de experiencias, proponiéndolo al efecto al Ingeniero Jefe del distrito agronómico respectivo, que informará acerca de sus condiciones.

7.º En el caso de que las Corporaciones provinciales de Zamora y Granada no acudieran al llamamiento á que se refiere la disposición anterior, se instalarán las estaciones en los locales y terrenos mas adecuados que ofrezcan los Ayuntamientos de las ciudades y villas interesadas en la repoblación de sus viñedos.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Enero de 1893.—Moret. Señor Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

Excmo. Sr.: Por renuncia de los aspirantes propuestos en los dos primeros lugares para la cátedra de Física y Química del Instituto de Orense;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien trasladar á dicha vacante, con el sueldo que actualmente disfruta, á don José Benet y Andréu, Catedrático numerario de igual asignatura en el de Teruel, tercer lugar de la propuesta formulada por ese Consejo para la provision de la referida cátedra.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Enero de 1893.—Segismundo Moret.—Señor Presidente del Consejo de Instrucción pública.

Méritos y servicios de don José Benet y Andréu

Título de Licenciado en Ciencias, Sección de Naturales, que obtuvo por premio extraordinario, mediante oposición.

Ejercicios aprobados del grado en Doctor en la misma facultad y Sección.

Catedrático numerario de Historia Natural del Instituto de Canarias por oposición, en 30 de Diciembre de 1892.

Idem de Física y Química del Instituto de Teruel, por concurso, en 21 de Octubre de 1891. (G. núm. 22.)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala segunda del Tribunal Supremo, declarando no haber lugar al recurso de casación admitido de derecho en beneficio de Leoncio Francisco Fraj García, José Nuez Salas y José Naval Arnal, sentenciados á la pena de muerte por la Audiencia de

Teruel, como autores del delito complejo de robo y homicidio;

Teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron en la ejecución de este delito y el resultado de la prueba respecto á la participación de cada uno de los penados.

Visto el art. 29 de la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

Oída la Sala sentenciadora y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar, por la inmediata de cadena perpetua y accesorias correspondientes, la pena de muerte impuesta á Leoncio Francisco Fraj García, José Nuez Salas y José Naval Arnal, en la causa de que se ha hecho mérito.

Dado en Palacio á veintiuno de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—María Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio M. Ríos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala segunda del Tribunal Supremo declarando no haber lugar al recurso de casación admitido de derecho en beneficio de José Justo Martín Mayoral, sentenciado á la pena de muerte por la Audiencia de Avila como autor del delito complejo de robo y homicidio.

Teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron en la ejecución de este delito;

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

Oída la Sala sentenciadora, de acuerdo con lo consultado por la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y conformándose con el parecer de Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar, por la inmediata de cadena perpetua y accesorias correspondientes, la pena de muerte impuesta á José Justo Martín Mayoral.

Dado en Palacio á veintiuno de Enero de mil ochocientos noventa y tres.—María Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos. (G. núm. 23)

TRIBUNAL SUPREMO

SALA SEGUNDA

En la villa y Corte de Madrid, á 15 de Octubre de 1892, en el recurso de casación por infracción de ley que ante nos pende, interpuesto por José Regueira Lopez contra sentencia de la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña, en causa seguida al mismo en el Juzgado de instrucción de dicha ciudad por disparo de arma de fuego;

Resultando que la expresada sentencia, dictada el 9 de Junio último, conigna los hechos en los siguientes resultados:

Primero. Que en la tarde el 10 de Mayo último, un crecido número de jóvenes del pueblo de la Silva, juntos y en tropel, invadieron el de la Grela, arrojando piedras á las casas é insultando á sus moradores; que al verse los de la Grela á acometidos salieron al campo para procurar contener á los invasores, pero en vez de conseguirlo fueron rechazados por aquellos, disparándoles al efecto multitud de piedras y de tiros de arma de fuego, causando con el proyectil de uno de éstos al vecino de la Grela José Soane Rodríguez una herida en la cara palmar dorsal de la mano izquierda, que para su curación necesitó asistencia médica por espacio de catorce días, durante los

que no pudo dedicarse á sus ocupaciones, sin haberle dejado mas impedimento ni deformidad; cuyos hechos se declaran probados.

Segundo. Que de los jóvenes de la Silva que invadieron el pueblo de la Grela se conocía y visto por los de la Grela, armados con una pistola de dos cañones y con ella hacer dos ó mas disparos contra los de este pueblo, el hoy procesado José Regueira Lopez, y así se declara probado.

Tercero. Que el agraviado José Soane Rodríguez, si bien renunció á ser parte en la causa, no lo hizo de la indemnización que correspondiente pueda; y que el procesado carece de bienes con que garantizar las responsabilidades que puedan alcanzarle; probado.

Resultando que aquel Tribunal calificó los hechos de delito de disparo de arma de fuego contra determinada persona, y declarando autor del mismo á José Regueira, sin circunstancias modificativas, condenó á éste á dos años y once meses de prisión correccional, accesorias y mitad de costas;

Resultando que contra esta sentencia interpuso el mismo recurso de casación por infracción de ley, fundándolo en el núm. 6 del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y citando como infringidos los artículos 423 y 83 del Código penal, por cuanto se le impuso pena mayor que la debida, según estos preceptos:

Resultando que admitido el recurso, fué apoyado en el acto de la vista por el Ministerio fiscal.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Luis Lamas;

Considerando que castigado por el artículo 423 del Código penal el delito de disparo de arma de fuego con la prisión correccional en sus grados mínimo y medio, y debiendo dividirse, según el 83, el tiempo de esta pena en tres periodos iguales para formar un grado con cada uno, el medio que es el que corresponde imponer al procesado por la ausencia de circunstancias modificativas de la culpabilidad, comprende desde un año, ocho meses y veintidós días hasta dos años, once meses y diez días de la expresada prisión;

Considerando que la pena de dos años y once meses impuesta al recurrente por la sentencia reclamada, no rebasa los límites de ese grado medio, el cual pudo extenderse hasta diez días mas, y que por lo tanto no se ha incurrido en ella en el error de derecho que se le atribuye;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso interpuesto por José Regueira Lopez contra la citada sentencia de la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña, condenando al recurrente en las costas y al pago de 125 pesetas por razón de depósito, cuando mejore de fortuna; y comuníquese esta resolución al Tribunal sentenciador á los efectos procedentes.

Ai por esta nuestra sentencia, que se publicará en la *Gaceta de Madrid* é insertará en la *Gaceta legislativa*, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Miguel de Castells.—Mateo de Alcocer.—Rafael Alvarez.—Diego Montero de Espinosa.—Rafael de Solís Liébana.—Luis Lamas.—Enrique Lassus.

Publicación.—Leída y publicada fué la sentencia anterior por el Excelentísimo Sr. D. Luis Lamas, Magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo, estando celebrando audiencia pública dicha Sala en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.

Madrid 15 de Octubre de 1892.—Licenciado, Helodoro Rojas. (G. n. 20)

ANUNCIOS OFICIALES

DELEGACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Anuncios

La Direccion general de Impuestos y Delegacion del gobierno en el arrendamiento de tabacos, en comunicacion de treinta y uno de Diciembre último, trascribe á esta Delegacion la Real orden siguiente:

«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Direccion general con fecha de ayer la Real orden que sigue:—Ilustrísimo señor.—Vista la instancia en que las Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Madrid á Zaragoza y Alicante, de los Andaluces, de Madrid á Cáceres y Portugal, de Medina del Campo á Salamanca y de Santiago á Carril, solicitan que del modelo de guías para la circulacion de alcoholes adjunto al Reglamento de 26 de Noviembre próximo pasado se supriman las palabras *via recta*, y que á la vez se disponga que el plazo que se fije para la validez de dichos documentos no sea nunca menos que el máximo que la tarifa del ferrocarril conceda para el transporte de las mercancías: Resultando que las expresadas compañías fundan sus peticiones, primero en que los transportes por ferrocarril se sigue por regla general y á voluntad del remitente la vía más económica, que no siempre es la más recta ó corta, porque las combinaciones de tarifas se hacen más fáciles por aquel medio; y segundo, en que si se fijaran para la validez de las guías plazos menores que los autorizados para el transporte en las tarifas aprobadas por el Gobierno, plazos que en las distancias largas han de ser forzosamente mayores de quince días, sobre todo con las tarifas reducidas se daría el caso de caducar las guías antes de terminado el transporte sin culpa y con responsabilidad de las Compañías: y considerando que es desde luego evidente la fuerza de las razones alegadas por las Compañías de ferrocarriles en apoyo de su petición, concurriendo además en favor de la misma la circunstancia de que pudiendo radicar algunas fábricas de alcoholes en localidades en que no existan estaciones de vía férrea, han de utilizar previamente para la expedición de sus productos las carreteras ó caminos ordinarios, prolongando por lo tanto los plazos necesarios para el término del transporte, así como lo no menos atendible de que el comercio por razón de la mayor economía ó facilidad se sirve en muchos casos de las vías fluviales ó marítimas aun cuando resulten más largas que las terrestres; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien disponer, primero, que en las guías para la circulacion de los alcoholes, aguardientes, etcétera, se entienda por *via recta* la que corresponda á la tarifa que se aplique en el ferrocarril; y segundo, que las administraciones llamadas á expedir y autorizar estos documentos señalen como plazo para la validez de los mismos el que soliciten los dueños del alcohol á que se refieran. De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.»

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para conocimiento de los interesados á que se refiere la preinserta soberana disposición.

Orense 20 de Enero de 1893.—El Delegado, Ignacio Vizcaino.

damiento de Tabacos en comunicacion de cinco del que rige trascribe á esta Delegacion la Real orden siguiente:

«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Direccion general con fecha tres del actual la Real orden que sigue:—Ilustrísimo señor.—Vistas las reclamaciones y consultas presentadas en este Ministerio solicitando que las existencias que tenían los fabricantes de licores en quince de Diciembre próximo pasado se consideren en el mismo caso que la de los almacenistas, comerciantes y especuladores á quienes se refiere la Real orden de 17 de Diciembre último y que en su consecuencia se les admita la declaracion jurada en la misma prevenida, á fin de expedir con referencia á ella los *ventas* que legalicen la circulacion de sus productos: Considerando que segun lo dispuesto en el art. 37 del Reglamento, los dueños de aparatos rectificadores y los que transformen los líquidos en otra clase de productos espirituosos, no tendrán que hacer abono alguno, siempre que justifiquen que los que emplean como primeras materias han satisfecho el impuesto y como en las disposiciones transitorias se previene empezaría éste á regir en quince de Diciembre último, por todas las salidas de las fábricas que tuvieran lugar desde la misma fecha, es lógico que no proceda exigir adeudo alguno por los licores y otros líquidos ya laborados en el indicado plazo: y considerando que encuan to á los alcoholes, conforme á la misma disposicion transitoria y al art. 34 del Reglamento, que previene que la primera partida del cargo en la cuenta de las fábricas sea las existencias que tuvieran según declaracion de los fabricantes al empezar á regir el nuevo impuesto, es evidente que debe exigirse los derechos correspondientes á medida que salgan de las fábricas aun cuando se haya convertido en otro líquido; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien disponer que los licores existentes en quince de Diciembre próximo pasado que los fabricantes han debido consignar en sus declaraciones pueden circular sin pago de derechos sujetándose á las reglas establecidas en la Real orden del diez y siete del mismo, publicada en la *Gaceta* del diez y ocho y que en cuanto á los alcoholes que existieran en las mismas fábricas de licores el día quince hay que atenerse al art. 34 y disposicion transitoria del Reglamento. De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes.»

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para conocimiento de los interesados á que se refiere la preinserta soberana disposición.

Orense 20 de Enero de 1893.—El Delegado, Ignacio Vizcaino.

ADMINISTRACION

DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Recaudacion

El Recaudador de Contribuciones de la Zona única de Verín Don Ignacio Contreras Piñero, me comunica con esta fecha el nombramiento de Agentes auxiliares para la cobranza de las contribuciones de dicha Zona, en favor de Don José María Gonzalez Vazquez y de Don José Carrera Franco, naturales y vecinos de la Lanza en la provincia de Pontevedra, para que en su nombre puedan ejercer todos los actos relacionados con aquella en la forma prevenida por el art. 12 de la instruc-

cion de Recaudadores y Agentes de 12 de Mayo de 1888.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.ª de dicha Instruccion, se hace público para el debido conocimiento de las autoridades municipales y judiciales, á fin de que no se les ponga obstáculo alguno en el ejercicio de sus funciones, antes bien se la faciliten con los auxilios que demanden y fueren procedentes.

Orense 24 de Enero de 1893.—El Administrador de Contribuciones Urbano Gonzalez Rivera

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud de la circular del señor Gobernador inserta en el *Boletín* de 6 de Junio de 1892, y la cual deben tener muy presente los Señores Alcaldes y Secretarios, para evitar responsabilidades.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE ORENSE AÑO ECONÓMICO DE 1892-93

Mes de Enero

Estado demostrativo de los enfermos civiles de caridad existentes en la Hospital el día de la fecha, con expresion del número de vacantes que existen en virtud de lo acordado por la Comision provincial en sesion de 15 de Marzo último.

Número de camas disponibles, segun el acuerdo. 74
Idem de enfermos de caridad hasta el día. 80

Exceso en camas supletorias. 6
Orense 24 de Enero de 1893.—El Director, Narciso Serantes.

AYUNTAMIENTOS

VILLAMARIN

Las cuentas de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 1891 á 92, se hallan expuestas al público en esta Secretaría por término de quince días, con el fin de que cualquiera vecino pueda enterarse y hacer las observaciones que considere justas.

Por igual término queda tambien expuesto el presupuesto adicional refundido del corriente ejercicio, y el ordinario para el año entrante de 1893 á 94, con el mismo objeto que se manifiesta anteriormente.

Villamarin Enero 23 de 1893.—El Alcalde, Ramon Caride.

CEA

Rendida por el Depositario de fondos municipales de este distrito la cuenta de gastos é ingresos correspondiente al ejercicio de 1891 92, se hará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento por término de ocho días á contar desde la insercion del presente anuncio en el *Boletín oficial* de la provincia.

Por igual término permanecerá expuesto al público el presupuesto adicional refundido, que ha de regir en el actual año económico.

Lo que se hace público para general conocimiento y á los fines expresos en la ley.

Cea Enero 24 de 1893.—El Alcalde, Andrés Fernandez.

TRIBUNALES

MUNICIPALES

Edicto

D. Manuel Seara Cid, Juez municipal de la Gudña y su distrito. Hago notorio: Que las listas de Jurados de cabezas de familias y capa-

ciudades de este término municipal rectificadas en la forma prevenida en el artículo 16 de la Ley de 20 de Abril de 1888, y á los efectos del artículo 18 de la precitada Ley, estarán expuestas al público en la Secretaría de este Juzgado municipal por el término de quince días á contar desde el primero del proximo Febrero.

Gudña Enero 23 de 1893.—Manuel Seara.—El Secretario, Carlos Dieguez.

ANUNCIOS

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

Orense.—Progreso, 36

MAQUINAS PARA COSER

Las seis grandes fábricas que tiene establecidas en América y Europa la Compañía Fabril SINGER y que ya once millones de máquinas revela bien á las claras la marcada predilección que el público de ambos continentes demuestra por las máquinas SINGER. Entre los hermosísimos modelos que dieron justa fama á esta fabricacion descuellan la nueva *Lanzadera vibrante*. Desprovista de engranes y de fácil manejo, es la más ligera, la que menos ruido hace, la de más sencillo mecanismo y con la que pueden ejecutarse primorosas labores.

A pesetas 2'50 por semana

Grandes descuentos al contado. Comisionados para la venta y cobros en los principales pueblos de la provincia.

CARRETES DE HILO

Torzales de seda.—Agujas, aceite.

Piezas sueltas y accesorios para toda clase de costura. Pídanse catálogos ilustrados que se dan gratis.

VIDES AMERICANAS

DE LOS

CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA

Los que deseen adquirir de estas hermosas vides cuya resistencia contra la filoxera y otras enfermedades criptogámicas está reconocida, pueden remitir sus pedidos al representante en esta región D. Roberto Justo Novoa, calle de Colon, núm. 20, Orense.

Conviene no descuidarse á evitar que se agoten las existencias.

A LOS ENFERMOS

DE LOS OJOS



Llegó el renombrado especialista en las enfermedades de la vista Don M. Marban. Tiene su Clínica Oftalmológica en la calle de Hernán Cortés, número 7.

Horas de consulta, desde las diez de la mañana en adelante.

Coloca y vende ojos artificiales.

NOTA. En la primera visita serán desengañados los que no tengan remedio.—8.

VENTA

A voluntad de su dueño se vende la mitad de la casa señalada con el número 33, en la calle de Santo Domingo de esta ciudad, con su patio ó resio: dará razón el Procurador Berjano.—69

Imprenta LA POPULAR